

MICHOACÁN: UNA LUZ ENTRE TINIEBLAS

Por: Héctor Ceballos Garibay

Diez o quince años, quizá más, lleva nuestra entidad precipitándose hacia un Estado fallido, peor aún: sufriendo la ausencia del Estado de Derecho, sobre todo en este último lustro. Las consecuencias no podían ser más ominosas: debacle de las instituciones, crisis de las finanzas públicas y privadas, destrucción del tejido social, proliferación de la delincuencia y la impunidad, desmoralización ciudadana y reino creciente del narcopoder. Esta era la realidad (y parcialmente lo sigue siendo) de Michoacán hasta antes de la aparición, a principios del 2013, de las autodefensas de Tierra Caliente, un fenómeno sociológico novedoso y con características propias de la región.

Lo dicho arriba ciertamente conlleva una generalización, pues en toda sociedad siempre existen grupos e individuos que conforman casos excepcionales de salvaguarda de la dignidad frente a cualquier poder avasallador, en este caso, de cara a la violencia delictiva de los Caballeros Templarios, tan omnipotentes, que eran capaces de comprar elecciones, imponer alcaldes, corromper jueces y ministerios públicos, y medrar con el terror secuestrando y extorsionando a los ciudadanos.

Es fácil culpar a la clase política de la hecatombe social que hemos padecido en estos aciagos tiempos. Más difícil, en cambio, resulta asumir una conciencia autocrítica y responsabilizarnos como comunidad –funcionarios y sociedad civil– de lo acontecido en Michoacán. Me refiero a la complicidad de la mayoría de la población con las reglas del juego impuestas por los criminales durante los años recientes. A veces por omisión cobarde y otras en franca connivencia, terminamos por bailar al son que nos tocaron los delincuentes, tanto los mafiosos como los mandrines de cuello blanco: les vendimos o les compramos propiedades y mercancías, asistimos a sus fiestas e integramos a sus familiares a nuestra cotidianidad social, pagamos la cuota sin chistar, nos hicimos de la vista gorda y

jamás los denunciemos. Desde esta perspectiva, no hay duda que colectivamente contribuimos a la creación del “infierno por todos tan temido”.

En el actual proceso de rescate y reivindicación de Michoacán, los actores han sido múltiples; en este texto me referiré con exclusividad al papel desempeñado por las autodefensas y el gobierno federal.

Respecto al primer grupo, los guardias comunitarios de Tierra Caliente, ya no quedan dudas sobre su valiosa contribución: a) Como reacción valerosa de una parte de la sociedad civil que, arriesgando su vida, se levantó en armas para terminar con ese *vía crucis* que padecían a diario en su propio lugar de origen (asesinatos, pagos por derecho de piso, extorsiones, secuestros, expropiaciones, violaciones, etc.); b) En tanto que, al no existir autoridades políticas y judiciales confiables en sus pueblos y en el plano estatal, optaron por la legítima defensa de sus vidas y de su patrimonio, recurriendo a la auto-organización ciudadana; c) En la medida en que, derivado de esta insurgencia espontánea y combativa, se desató un cruento enfrentamiento militar entre templarios y autodefensas, precipitando la intervención de la federación que tuvo entonces que enviar de emergencia no sólo a la policía y al Ejército como encargados del orden público, sino a un Comisionado Federal que aplicara una estrategia integral de salvación del estado; d) Puesto que, gracias a su conocimiento minucioso del territorio donde habitan, así como a la información directa que poseen de sus vecinos y del *modus operandi* –tanto de los mafiosos como de sus compinches-, las autodefensas han sido pieza clave para que la policía federal y el Ejército pudieran localizar y detener a los capos y sus halcones. Sin esta contribución decisiva de la población oriunda de la región nunca se hubiera roto el círculo vicioso de complicidad y connivencia que existía entre las organizaciones delictivas y los pobladores, quienes, ya fuere por miedo o por estar coludidos con los criminales, no denunciaban los ilícitos de los cuales eran víctimas o testigos. Y sin el auxilio de la denuncia ciudadana anónima, cualquier operativo policiaco está destinado al fracaso, tal como se demostró en el pasado. En virtud de que existen guardias comunitarias nativas de la región, por fin ahora ha desaparecido el temor de la

gente a quedar inerte ante las venganzas de los Templarios cuando la Policía Federal reciba la orden de abandonar Michoacán. Por fortuna, el grueso de los narco-delincuentes hoy están en desbandada o escondidos, mientras que la lucha de los comunitarios sigue viva y no sólo constituye una experiencia social exitosa en Tierra Caliente, sino que también representa una loable lección histórica de rescate de la dignidad perdida.

Precisamente por tratarse de un movimiento popular, genuino, autogestivo y plenamente justificado en su razón de ser, sorprende la reacción negativa y la incompreensión inicial que suscitaron los grupos de autodefensa tanto en los círculos académicos y de intelectuales progresistas, como en los partidos y la prensa de izquierda. Paradójicamente, al mismo tiempo que los reporteros hacían espléndidas entrevistas y notas periodísticas en torno al avance y las causas justas del movimiento comunitario, los comentarios editoriales de esos mismos medios informativos acusaban a éste de incontables pecados: recibir dinero y armas de otros cárteles, estar infiltrados por la mafia de Jalisco, ser simples peleles del gobierno, contar con un pasado delictuencial, actuar igual o peor que los Caballeros Templarios, y ser una agrupación peligrosa de paramilitares. Analistas políticos de altos vuelos y distinguidos parlamentarios exigieron al gobierno federal el desarme inmediato de esa masa heteróclita de comunitarios que al portar armas de grueso calibre afrentaban al Estado de Derecho. Los prejuicios sociales, el antigubernismo visceral y el dogmatismo doctrinario de los intelectuales de cubículo explican los errores de estas críticas hechas al vapor. Por ejemplo: pedir que se aplicara el Estado de Derecho cuando éste simplemente ya había dejado de existir en Michoacán de tiempo atrás. La comparación con el caso colombiano igualmente resultó equívoca: aquí no hay presencia de grupos guerrilleros (las FARC y el ELN), y en aquel país los paramilitares eran mercenarios al servicio del mejor postor. Situación muy distinta a la michoacana, pues aquí se trata de lugareños con motivaciones defensivas y cuya demanda principal –acabar con el poder templario- nada tiene que ver con las ideologías de los partidos. Y frente a tanta crítica moralina hacia las disputas y rivalidades entre los líderes comunitarios y a sus arbitrariedades, mismas que acontecen en todo

movimiento social, habría que recordarle a estas almas impolutas asuntos tan oprobiosos como la época del terror en la revolución francesa, las purgas estalinistas en la revolución rusa y las matanzas entre sí de los generales que ambicionaban la silla presidencial durante la revolución mexicana.

Antes de referirme al desempeño del gobierno federal en el rescate de Michoacán, debo aclarar que, como analista e investigador independiente, no reparo en la filiación partidaria de las personas que ejercen el poder Ejecutivo nacional y local, sino únicamente en los resultados que dichos gobiernos ofrecen a la ciudadanía. En honor a la verdad y en comparación con el desastre político y judicial que fue el “Michoacanazo” (2011), considero acertadas la mayoría de las medidas tomadas por el actual gabinete de Seguridad. Apunto las principales: a) Acompañar con apoyo logístico y de inteligencia militar el avance de las autodefensas por el territorio michoacano, retroalimentándose y respaldándose mutuamente a fin de lograr su objetivo: liquidar el poder de los Templarios y encarcelar a sus líderes (cabe comentar en este punto que, debido a su lamentable protagonismo, José Manuel Mireles no sólo perdió el apoyo de los comunitarios de su región, sino que hoy está sometido a proceso judicial porque cometió el error de “irse por la libre”, olvidándose que para derrotar a los templarios es imprescindible sumar esfuerzos con el gobierno federal y local); b) Privilegiar la ruta de legalización, reglamentación de las armas y capacitación de los comunitarios, mediante la creación de la Policía Rural, en vez de pretender confrontarse con ellos y tratar de desarmarlos, lo que hubiera provocado una ruptura en sus tareas de cooperación y probablemente una masacre de civiles con un costo demoledor para el gobierno de Peña Nieto (además, sólo dotándolos de una estructura institucional –policías rurales- se volvía posible evitar el descontrol organizativo del movimiento comunitario y las infiltraciones por parte de los narco-delincuentes); c) Nombrar un Comisionado Federal encargado de una estrategia integral de desarrollo, cuyo eje vertebral fuera la reconstrucción del tejido social a través de una inversión millonaria en educación, deporte, cultura, salud, infraestructura y creación de empleos; d) Aplicar medidas de seguridad basadas en la coordinación institucional (federación, estado y municipios a través del mando único), así como en la

sustitución de las policías municipales cooptadas por la delincuencia organizada, lo cual presupone la capacitación de los nuevos cuerpos policiacos (aún está pendiente el despliegue de la Gendarmería y terminar el proceso de renovación de los Ministerios Públicos y de los jueces ligados a la vieja usanza); e) Tomar el control militar, a través de la Marina, de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, para poder fiscalizar la extracción y exportación ilegal del hierro, fuente de ganancias multimillonarias para los narco-delincuentes. En esta misma ruta de vigilancia, falta extender la supervisión a compañías madereras, huertas, empaques y otros negocios lucrativos que sirvieron para el “lavado de dinero” y que ahora podrán combatirse gracias a la Ley de Extinción de Dominio; f) Aparte de las visitas continuas de altos funcionarios y de los delegados federales a Michoacán con miras a supervisar la aplicación de los recursos públicos y su concreción en obras, asimismo resulta importante el apoyo permanente que brinden instituciones de reciente creación en temas de seguridad, tales como el Centro Nacional de Protección al Delito y la Coordinación Nacional Antisecuestros.

Los resultados conseguidos, aunque insuficientes, tienen un signo positivo: basta ver la notable disminución del número de secuestros y extorsiones en Tierra Caliente, así como la recuperación lenta pero firme de un nuevo clima de menor zozobra en estos lares donde nació y prosperó el movimiento social de las autodefensas. Desdichadamente, en esta etapa de transición ciertamente se ha registrado un aumento de la delincuencia menor: asaltos a comercios, vandalismo y robos a personas. En otras zonas del estado, principalmente las colindantes con Jalisco y en algunas ciudades importantes (Morelia, en particular) lugares donde los comunitarios no tuvieron presencia significativa, por desgracia el número de crímenes diarios continúan creciendo. Batallas fundamentales se han ganado en muy poco tiempo al debilitar a la cúpula de los templarios y al desmontar su estructura logística y financiera, pero la guerra no ha terminado. Además de la Tuta, faltan muchos personajes de cuello blanco que aún no rinden cuentas ante la justicia. El proceso paulatino de lograr desarrollo social y plena seguridad pública sigue su curso, sin embargo bien podría estancarse y hasta tener severos retrocesos.

Cabe aquí aludir a la buena coordinación que hubo entre el Comisionado Federal y el Congreso michoacano a la hora decisiva de tejer políticamente el nombramiento de Salvador Jara como Gobernador sustituto. De cara a la situación de emergencia estatal y para no contaminar la liza electoral del próximo año, nadie mejor que un académico prestigiado y sin ligas orgánicas con ningún partido político para encarar los enormes retos que presupone su alto cargo.

A manera de conclusión, hago votos porque pronto superemos el subdesarrollo político que subyace en el anti-gobiernismo obtuso que padecemos en el país. Un ciudadano consciente y una efectiva oposición política deben ejercer la crítica puntual y contundente, pero también tienen que aprender a reconocer los aciertos del gobierno en turno, sea del partido que fuere. La sectaria consigna de “mientras peor esté el país, mejor para mi causa política” propicia una atmósfera de animadversión sectaria y nos impide construir una cultura democrática en donde la solidaridad ciudadana y los esfuerzos mancomunados sean requisitos de la convivencia civilizada. Una crítica propositiva y una oposición política inteligente que plantee alternativas y no sólo insultos, es sin duda el mejor camino para ejercer esa “voluntad del optimismo” que bien podría ser la luz que a la postre erradique las tinieblas.

28 de junio de 2014, Sés Jarhani, Uruapan, Michoacán.